

Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial, San Salvador, a las ocho horas y cuarenta minutos del día veintiséis de mayo del dos mil diecisiete.

Por recibida la anterior solicitud de información suscrita por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en la cual pide que se le informe acerca de: “Solicito se me extienda una copia certificada del proceso marcado con referencia 21-16-2-NC del juzgado de sentencia, en el cual tengo carácter de víctima” (sic).

Sobre la petición anterior se hacen las consideraciones siguientes:

I. En efecto el objeto de la Ley de Acceso a la Información Pública, según lo establecido en su artículo 1 es la de “garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las Instituciones del Estado”. Y según el artículo 4 letra a) de ese mismo cuerpo normativo, establece que la información pública está regida por el principio de máxima publicidad, que exige que la información en poder de los entes obligados sea pública y su difusión sea irrestricta, salvo excepciones expresamente establecidas en la ley.

El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece el tipo de información que se considera oficiosa, o mejor dicho que se debe dar a conocer al público, y el artículo 13 de la misma ley, establece que tipo información debe darse a conocer a todas las personas por parte del órgano Judicial.

Pese a todo ello, no toda petición de información que se solicite puede ser evacuada, por tanto jurisprudencialmente se han construido límites a la obtención de la información por esta vía administrativa que ofrece la ley de Acceso a la Información Pública, haciéndose una distinción entre información de índole administrativo y la información de carácter jurisdiccional.

II. Al respecto, específicamente en la resolución interlocutoria del proceso de amparo con referencia 482-2011, de fecha seis de julio de dos mil quince, la Sala de lo Constitucional de esta Corte establece que: “... la información jurisdiccional es todo dato que constate la existencia o realización de un acto que tiene efectos o consecuencias directas o indirectas en un proceso o procedimiento tramitado ante autoridades que ejercen

jurisdicción, tales como fases del proceso, demandas, informes, audiencias, incidentes, recursos, decisiones, entre otros. Este tipo de información alude a los actos por medio de los cuales se inicia, impulsa y finaliza un proceso. Así las cosas, la idea de información administrativa resulta excluyente: será administrativa toda información que no sea jurisdiccional o que no tenga una conexión con los actos que producen consecuencias en los procesos o procedimientos judiciales, tales como el contenido de los libros administrativos, agendas de sesiones, estadísticas, número de referencia de proceso en trámite o fenecidos, etc. (...) el acceso a la información pública que facilita la LAIP únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al jurisdiccional, pues resulta factible obtener información sobre este último de conformidad con las reglas que rigen la materia correspondiente...”(sic).

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la resolución emitida en el proceso de inconstitucionalidad con referencia 7-2006, del veinte de agosto del dos mil catorce, en la cual literalmente se dijo: “Esta resolución únicamente delimita los ámbitos competenciales que corresponden al Oficial de Información de la Corte Suprema de Justicia y los que atañen a esta Sala. En realidad, lo que se ha hecho es aclarar que la información administrativa que corresponda al Órgano Judicial deberá ser tramitada ante el primero, mientras que la información jurisdiccional ante los respectivos tribunales...”(sic).

En consonancia con lo antes relacionado, es preciso acotar que el Instituto de Acceso a la Información Pública por resolución con referencia NUE 160-A-2015 (MV), de fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, sostuvo que “...el art. 110 letra `f` de la LAIP reconoce la vigencia de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al acceso de expedientes durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancia con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-2012, debe interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el acceso a los expedientes relacionados con normas procesales se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIP...”.

III. En ese orden de ideas, a partir de un análisis de la petición planteada por elXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se advierte que pretende obtener información de carácter jurisdiccional relativa a obtener una copia de un proceso penal, lo cual no puede

tramitarse por esta vía administrativa, pues ya el Código Procesal Penal establece un mecanismo para la obtención de copias de los mismos, así lo establecen sus arts. 150 y 151, el cual le debe ser proporcionado por la autoridad judicial sobre todo, por la calidad de víctima que ostenta en el mismo.

De manera que, conforme a los criterios sostenidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública –antes citados– se determina que la información solicitada es de carácter jurisdiccional y, por tanto, escapa del ámbito de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues en este caso solicita se brinde información propia de procesos judiciales relacionados al área penal. En consecuencia, no le compete a la suscrita Oficial de Información Interina del Órgano Judicial tramitar la solicitud presentada en fecha 24/05/2017, por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al tratarse de información propiamente jurisdiccional.

En igual sentido se ha pronunciado esta Unidad, al requerírsele información referente a situaciones relativas a la tramitación de juicios o procesos de cualquier materia, y para ello podemos invocar como antecedentes las resoluciones emitidas el 13/03/2017 y 30/03/2017, en los expedientes con referencias 2216 y 2286 –respectivamente–; en los cuales se mantiene el criterio de que dicha información, por su naturaleza jurisdiccional, debe ser requerida directamente ante los tribunales correspondientes.

Por tanto, con base en los razonamientos precedentes y artículos 71 y 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se resuelve:

1) Declarar la incompetencia de la suscrita Oficial de Información Interina del Órgano Judicial para tramitar la petición de información del señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, relacionada en el prefacio de esta resolución, por ser la información requerida de índole jurisdiccional y, por tanto, deberá tramitarse directamente ante el tribunal correspondiente.

2) Notifíquese.

FIRMA: Oficial de Información Interina del Órgano Judicial. – EMP -- Rubricada.

Me/mgph